



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 17 O R D I N A R I A

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2017

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del lunes veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número dieciséis ordinaria, celebrada el jueves veintitrés de febrero del año en curso.

Por unanimidad de once votos, el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del lunes veintisiete de febrero de dos mil diecisiete:



1. 2/2016

Declaratoria general de inconstitucionalidad 2/2016, solicitada por el Pleno del Décimo Primer Circuito, respecto del artículo 4 de los Lineamientos para la Recepción, Registro, Control, Resguardo y Seguimiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el doce de diciembre de dos mil catorce. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“ÚNICO. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia”*.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reabrió la discusión en torno a la propuesta integral del proyecto.

La señora Ministra Luna Ramos narró que: 1) en septiembre de dos mil catorce se publicaron los Lineamientos para la Recepción, Registro, Control, Resguardo y Seguimiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial, emitidos por la Coordinación de Contraloría del Estado de Michoacán, 2) dichas disposiciones de carácter general fueron impugnadas en diversos juicios de amparo, 3) un tribunal auxiliar estableció jurisprudencia en el sentido de que era inconstitucional su artículo 4, 4) el Pleno de ese Circuito solicitó a esta Suprema Corte la declaratoria de inconstitucionalidad correspondiente, 5) en esta Suprema Corte se inició la tramitación de esa solicitud y, antes de resolverse, el veintiuno de septiembre del año pasado la autoridad responsable modificó dicho artículo 4, 6) se



Sesión Pública Núm. 17

Lunes 27 de febrero de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

presentó el proyecto proponiendo declarar sin materia esta declaratoria general de inconstitucionalidad, en atención a que el artículo reclamado se modificó sustancialmente.

Se manifestó de acuerdo con el sentido del proyecto, apartándose de sus consideraciones en relación con la modificación sustancial, puesto que únicamente resulta suficiente determinar que se modificó el artículo en cuestión para declarar el asunto sin materia, además de que un nuevo acto legislativo implica que no puede existir una repetición de acto reclamado ni incumplimiento de sentencia, sino que posibilita la impugnación de ese nuevo acto legislativo a través de un nuevo juicio de amparo.

Agregó que lo anterior obedece al principio de relatividad de las sentencias —“fórmula” Mariano Otero—, consistente en que una sentencia de amparo, una vez emitida y ejecutoriada, se convierte en una norma individualizada, que obliga a las personas involucradas dentro del procedimiento contra leyes —amparo indirecto—, es decir, la ley no se expulsa del sistema jurídico, sino que simplemente beneficia a la persona con la concesión del amparo, por lo que se le deja de aplicar la norma combatida y, si la autoridad la vuelve a aplicar, podría incurrir en una repetición de acto reclamado. Diferenció que, en amparo directo, los efectos son únicamente para que no se aplique la ley en un acto reclamado, por ejemplo, una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin a un juicio. En ese contexto, la declaratoria general de inconstitucionalidad



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

solamente atiende a aquellas sentencias en las cuales se impugnó la inconstitucionalidad de una ley en un juicio de amparo indirecto.

Apuntó que una crítica al principio de relatividad en las sentencias de amparo es que, si ya se estudió que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales, entonces no deberían aplicarse al resto de la población porque, de lo contrario, sería injusto, inequitativo e incorrecto; sin embargo, hay argumentos en contrario, entre otros, que no necesariamente la declaratoria de inconstitucionalidad proviene de un tribunal constitucional o de última instancia, sino de un juez de distrito, lo cual significa que no pasó por el escrutinio de la Suprema Corte. Retomó que la idea fundamental de este principio es que el juicio de amparo no es privativo, sino que opera en todos los procedimientos jurisdiccionales que concluyen con una sentencia, la cual, una vez que causa estado, es una norma jurídica individualizada que vincula a las partes que intervienen en esa relación jurídico-procesal.

Indicó que lo anterior no significa que, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, no existan declaratorias generales de inconstitucionalidad, pues ello depende de la competencia del órgano que estudia la norma y los sujetos involucrados en la relación jurídico-procesal, por ejemplo, esta Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, cuya declaración de inconstitucionalidad es para que la norma no se aplique en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

toda la República o en una entidad federativa, dependiendo del caso, esto es, su expulsión del sistema jurídico, en términos del artículo 105 constitucional.

Recordó que, recientemente, se reformó el artículo 107 constitucional, así como diversos artículos de la Ley de Amparo, para establecer la declaratoria general de inconstitucionalidad, con lo cual se pretende que, cuando se ha declarado la inconstitucionalidad de un precepto jurídico, se da aviso al órgano legislativo correspondiente para que haga los cambios respectivos y, solamente en caso de que pasados noventa días de esta petición, ante la omisión del órgano legislativo, esta Suprema Corte hará dicha declaratoria. En ese tenor, consideró que el legislador tiene la función de modificar una legislación o disposiciones de carácter general, para regular determinada situación, tomando en consideración si hubo o no actos jurídicos que, con base en esa legislación, se llevaron a cabo, lo cual implica la introducción de artículos transitorios; no obstante, la labor legislativa es libre y soberana, por lo que el Poder Judicial de la Federación no puede sugerir lineamientos, sino simplemente notificarle del vicio de inconstitucionalidad y la razón por la que se concedió el amparo.

Estimó que, cuando el artículo 107 constitucional prevé que “Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria”, no significa que esta Suprema Corte deba analizar la constitucionalidad del acto legislativo emitido en cumplimiento del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, ya que implica el análisis de un acto legislativo distinto, el cual no ha sido motivo de ningún medio de impugnación ante un órgano del Poder Judicial de la Federación.

Señaló que, si la autoridad responsable vuelve a emitir el acto en las mismas circunstancias, —según las tesis de este Tribunal Pleno— se necesita, para que haya repetición de acto reclamado, que no se emita un nuevo acto legislativo porque, de suceder esto último, no se trata de una repetición de acto reclamado, sino el análisis de un acto legislativo nuevo. Por otra parte, recordó que el punto quinto del Acuerdo General 11/2011 de esta Suprema Corte contempla que “QUINTO. Si antes de transcurrir los noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por oficio que se realice a la autoridad emisora de la norma general respectiva, entra en vigor una nueva norma general que a juicio del Tribunal Pleno modifique aquélla, el procedimiento de declaratoria general relativo se deberá declarar sin materia. El Ministro Ponente someterá al Pleno el proyecto de resolución respectivo”, lo cual ocurrió en el caso concreto.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El señor Ministro ponente Cossío Díaz recordó haber modificado el proyecto añadiendo la tesis indicada por el señor Ministro Laynez Potisek en la sesión pasada. Por lo demás, anunció que sostendría el proyecto.

El señor Ministro Medina Mora I. sugirió incluir un pronunciamiento en el sentido de que no pasa inadvertido que la norma que sustituyó a la primera contiene el mismo vicio de inconstitucionalidad.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz señaló que podría parafrasear “más allá de que la autoridad o el órgano legislativo del Estado de Michoacán haya emitido esas disposiciones, lo cierto es que la función del control respectivo es la que ya se ha precisado, contenida en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 107 constitucional”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales observó que ello sería sin realizar un juicio de valoración respecto de la nueva disposición.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz precisó que, efectivamente, no se realizaría un juicio de valoración de la nueva disposición.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta modificada del proyecto, la cual se aprobó por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos apartándose de consideraciones, Franco González Salas,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Zaldívar Lelo de Larrea, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. Los señores Ministros Pardo Rebolledo, Piña Hernández y Medina Mora I. votaron en contra. La señora Ministra Piña Hernández anunció voto particular.

Por instrucciones del señor Ministro Presidente Aguilar Morales, el secretario general de acuerdos leyó el punto resolutivo que regirá el presente asunto, de la siguiente forma:

“ÚNICO. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia”.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la congruencia formal del punto resolutivo, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales decretó un receso a las trece horas con nueve minutos, y reanudó la sesión a las trece horas con veintiséis minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto de la lista:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

II. 25/2016
y acs.
27/2016 y
28/2016

Acción general de inconstitucionalidad 25/2015 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016, promovidas por diversos diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de dicho Estado, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. En el proyecto formulado por el señor Ministro Alberto Pérez Dayán se propuso: *“PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 27/2016 y 28/2016, promovidas, respectivamente, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 25/2016, promovida por los integrantes de la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracciones II, III, V y XII, 12, fracción II, inciso b), 14, 15, 16, 33, fracción II, 39 y 40 —con la salvedad precisada en el resolutivo cuarto de este fallo— de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada por Decreto número 75 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 12, fracción III, incisos a) y b), 24, 25, 26, 33, fracción I, en la porción normativa ‘candados de pulgares’ y 40, en la porción normativa ‘sin embargo, podrá usarse como*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables', de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. QUINTO. Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado Libre y Soberano de México. SEXTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial 'Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México', así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta".

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales sometió a votación la propuesta de los considerandos primero y segundo relativos, respectivamente, a la competencia y a la oportunidad, la cual se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.

El señor Ministro ponente Pérez Dayán presentó el considerando tercero, relativo a la legitimación. El proyecto propone determinar improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por los cincuenta y un diputados de LIX Legislatura del Estado de México, pues



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

representan el sesenta y ocho por ciento de sus miembros, es decir, una mayoría calificada, por lo que están facultados para formular una iniciativa que pudiera culminar con la derogación, modificación o reforma de las normas cuya invalidez se planteó.

Indicó que los conceptos de invalidez, en lo general, se traducen en que esta Suprema Corte realice una consulta o solicitud de opinión consultiva; a lo cual se responde que no es competencia de este Máximo Tribunal, en términos de los artículos 94 y 107 de la Constitución, ni el fin de una acción de inconstitucionalidad, elaborar una opinión o parecer constitucional, sino que se instaura un juicio y se dicta un veredicto a partir de argumentos jurídico-formales, que conlleva la confrontación de las normas cuestionadas contra el Texto Supremo.

Aclaró que, para la elaboración del proyecto, se tomaron en consideración tres aspectos fundamentales: 1) el precedente del recurso de reclamación 10/2007, derivado de la acción de inconstitucionalidad 156/2007, de la Segunda Sala, en la cual, si bien el punto central no era específicamente el número de integrantes que deben presentar una acción de inconstitucionalidad, en tanto pudieran rebasar la mayoría, se realizan diversas referencias al proceso legislativo —desde la iniciativa de reforma constitucional y el diario de debates—, en donde consta que la voluntad del Constituyente fue entregar a las minorías parlamentarias a partir de un número previamente asignado



—treinta y tres por ciento— la posibilidad de impugnar lo que las mayorías habían aprobado.

Señaló que la doctrina es unívoca en cuanto a que la acción de inconstitucionalidad es un instrumento de control abstracto, cuyo sujeto legitimado, entre otros en la Constitución, es una minoría legislativa, cumpliendo un mínimo de treinta y tres por ciento de sus integrantes: 1) Sergio López-Ayllón en “Las acciones de inconstitucionalidad en la Constitución Mexicana”, 2) Rosario Márquez y Florencio Valladares en “El control constitucional en materia electoral a través de las acciones de inconstitucionalidad”, 3) Héctor Fix-Fierro en “La defensa de la constitucionalidad en la reforma judicial de 1994” y “La reforma judicial de 1994 y las acciones de inconstitucionalidad”, 4) Héctor Fix-Zamudio en “Significado actual del control constitucional en México”, en la cual citó a Luca Mezzetti en “Justicia constitucional y oposición parlamentaria” y a Loïc Philip en “Las grandes decisiones del Consejo Constitucional Francés”, y afirmó que el derecho de las minorías, contenido en el artículo 105 constitucional, funciona como la oposición política garantizada, lo que se traduce en la única oportunidad de las minorías para llevar a las mayorías a una controversia ante un tribunal constitucional, a diferencia del sistema puramente consultivo, en donde, antes de publicar una norma, la asamblea somete a la consideración de un tribunal constitucional la conformidad jurídica de las disposiciones aprobadas, como sucede en el modelo francés y continental europeo, a partir del modelo austríaco, 5) Hans Kelsen en



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Justicia constitucional”, en el cual dijo que “una ley inconstitucional, si es que es votada por mayoría simple, podría entonces invadir, en contra de la voluntad de la minoría la esfera de sus intereses constitucionalmente garantizados [...] Si se ve que la esencia de la democracia no es la omnipotencia de la mayoría, sino el compromiso constante entre los grupos representados en el Parlamento por la mayoría y la minoría, y por tanto, en la paz social, la justicia constitucional aparece como un medio particularmente idóneo para realizar esta idea. La simple amenaza de interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional puede ser, en las manos de la minoría, un instrumento propicio para impedir que la mayoría viole inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos y para oponerse, en última instancia, a la dictadura de la mayoría que no es menos riesgosa para la paz social, que la de la minoría”, y 6) Luigi Ferrajoli, quien entiende que “Para que un sistema político sea democrático es necesario que se sustraiga constitucionalmente a la mayoría el poder de suprimir o limitar la posibilidad de que las minorías se conviertan a su vez en mayoría. Y ello a través de límites y vínculos que establezcan lo que en varias ocasiones he denominado la ‘esfera de lo no decidible (qué y qué no)’”, es decir, el resultado del ejercicio democrático, aun siendo la legal expresión de la voluntad de la mayoría legislativa, debe someterse por las minorías a un análisis de regularidad, a través de la decisión de un tribunal constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Concluyó que, si se entiende que la acción de inconstitucionalidad es una decisión consultiva, esta Suprema Corte terminaría por ser parte del proceso legislativo, es decir, se convierte en un legislador positivo y sus observaciones, entonces, serían vinculantes; sin embargo, la Constitución no previó este sistema, como un esquema de certificación de las normas emitidas por los Congresos antes de su publicación. Así, el proyecto propone sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 25/2016, promovida por los integrantes de la LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de México.

Modificó el proyecto en su página cuarenta y cuatro para no referir a “actor y demandado”, sino a “partes contendientes”.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó conforme con la segunda parte de este considerando tercero, concerniente a la legitimación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se pronunció en contra de la primera parte, referente a la falta de legitimación de los integrantes de la LIX Legislatura, porque el primer argumento que esgrime, esto es, que los diputados no pueden promover una acción de inconstitucionalidad si representan un número suficiente que autónomamente pueda modificar la norma, porque habría que diferenciar entre quórum de asistencia y quórum de votación o las muy distintas maneras en que los Congresos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

participan; en segundo lugar, el treinta y tres por ciento previsto en el artículo 105, fracción II, constitucional, es un mínimo, no un tope ni un número fijo, además de que la lectura que hace el proyecto de la exposición de motivos es orgánica o corporativa respecto de la integración de los Congresos, es decir, supone que no existen partidos diferenciados o sectores en los partidos.

En cuanto al razonamiento de que los miembros de la LIX Legislatura están proponiendo una consulta, indicó que de los propios conceptos de invalidez, sintetizados en el proyecto a partir de su página cinco, se advierte una auténtica impugnación entre preceptos de la ley en cuestión y ciertos artículos de la Constitución, dando la idea de que se colocaría en una situación de inseguridad jurídica a los gobernados, respecto de la utilización de la fuerza pública, por lo que, si los legisladores hicieron una expresión psicológica, alusiva a qué los llevó a promover su acción — dudas sobre su constitucionalidad, con base en diversos ciudadanos que se acercaron a plantear esas dudas a los legisladores—, resulta irrelevante para determinar la legitimación, dado que sólo se requiere que se indiquen los preceptos que se estiman violados y los preceptos constitucionales que servirán de parámetro de regularidad.

Por lo que ve al señalamiento del proyecto en que, de determinarse la procedencia, la mayoría parlamentaria sería actor y demandado en el mismo juicio, recordó que las



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

legislaturas cambian constantemente, por lo que también cambian los criterios en cuanto a la aprobación de leyes.

Valoró que no se trata de una consulta limitativa, puesto que, si esta Suprema Corte determina que ciertos artículos contravienen la Constitución o los instrumentos internacionales, con una mayoría calificada, se expulsarían del orden jurídico mexicano.

Respecto de la doctrina aducida, estimó que únicamente delimita el concepto de un juicio de protección de minorías, mas ello no implica que queden las mayorías excluidas de toda posibilidad litigiosa. También consideró que no se pretende un control previo de la norma por parte de esta Suprema Corte, ya que el mecanismo no existe en la Constitución, además de que, a diferencia de un control previo, se podría llegar a declarar la invalidez de los preceptos impugnados, máxime que existe un conflicto en el propio Congreso, pues un porcentaje de sus integrantes planteó la acción de inconstitucionalidad y otro porcentaje contestó la demanda, por lo que hay una condición litigiosa.

Por esas razones, se expresó de acuerdo con la legitimación de los diputados integrantes de la LIX Legislatura y, en consecuencia, debería entrarse al análisis de sus conceptos de invalidez.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se pronunció en contra de esta parte del proyecto. Coincidió con el señor Ministro Cossío Díaz en que, de acuerdo con la doctrina y la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

práctica de la justicia constitucional en México y en el mundo, la regla general es la procedencia de los juicios de constitucionalidad o principio *pro actione* —en amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales— y la excepción es la improcedencia, lo cual requiere de un texto constitucional expreso y su aplicación estricta, que no se puede ampliar mediante lecturas de la exposición de motivos, del proceso legislativo o argumentos sociológicos, para crear una improcedencia no prevista en la Constitución. Agregó que las causas de improcedencia de la Ley de Amparo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, son constitucionales sólo si repiten las improcedencias constitucionales, además de que las improcedencias jurisprudenciales siempre se apoyan en la interpretación de dichas improcedencias constitucionales, es decir, las improcedencias no pueden generarse de manera espontánea por un tribunal constitucional.

Indicó que el artículo 105, fracción II, inciso d), constitucional es claro en cuanto a que la acción de inconstitucionalidad puede promoverse por “El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano”, lo cual debe leerse como un mínimo.

Recapituló que el proyecto utiliza dos argumentos para determinar que no hay legitimación en este asunto: 1) del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

procedimiento de reforma constitucional al artículo 105 se advierte que la acción de inconstitucionalidad fue concebida como un mecanismo a favor de las minorías legislativas, y 2) una mayoría de diputados de una legislatura sería suficiente para derogar o modificar la norma que estiman inconstitucional, por lo que haría innecesario recurrir al control constitucional.

Estimó que el primer argumento no se sostiene porque, si bien la acción de inconstitucionalidad se concibió para defender a las minorías, si esta Suprema Corte establece un tope máximo de quiénes pueden promover esa acción extrapolaría lo previsto por el Constituyente, además de que los doctrinarios han analizado la protección de las minorías, sin decir qué sucedería si promueve una mayoría, siendo que, aun cuando lo dijeran, no vincula a este Tribunal Constitucional, salvo que dieran argumentos sólidos para sostener otra postura. Estimó que, aunque este medio de control fue pensado para proteger a minorías legislativas, no significa que ello se deba traducir en una regla de improcedencia, máxime que, por la manera como la institución fue diseñada, no se estableció un límite máximo al porcentaje de legisladores que pueden impugnar una reforma.

Valoró que el segundo argumento —como indicó el señor Ministro Cossío Díaz— no toma en cuenta la diferencia entre fórmula y asistencia de votación, además de que esa reforma es una situación meramente hipotética, ya



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

que los procesos político-legislativos parten de una gran cantidad de coyunturas, con dependencia del cambio de integraciones: el momento político, el quórum y los arreglos políticos entre las fracciones, entre otros.

Apuntó que esta Suprema Corte ha sostenido el criterio de que las causas de improcedencia deben estar plenamente probadas, siendo el caso que se erige una razón hipotética para el sobreseimiento, además de que se incurre en una confusión: el proceso legislativo no es un medio de control constitucional en el que, si hipotéticamente se pudiera reformar la ley, se pierda la acción de inconstitucionalidad, sino que ésta consiste en un control abstracto que se promueve en interés de la Constitución. Añadió que este Tribunal Pleno ha establecido reiteradamente que la conducta asumida por alguno de los órganos que participan en el proceso legislativo no tiene implicación alguna en la acción de inconstitucionalidad, esto es, que no es requisito para su procedencia que los diputados hayan votado en contra de la ley en pugna, así como que Presidente de la República puede impugnar la constitucionalidad de la norma vía la acción de inconstitucionalidad, aunque no haya utilizado el veto.

Por lo que atiende a la interpretación del lenguaje psicológico, consideró que no hay manera de que, a partir del lenguaje empleado, se pueda resolver que la acción es improcedente, sino que basta un escrito en el cual se impugne una determinada ley, se identifiquen los preceptos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

violatorios de normas constitucionales y se den argumentos para ello, para tener que admitir la acción de inconstitucionalidad, aunado a que existe suplencia de la queja absoluta.

Finalmente, estimó que el presente caso no es una consulta, puesto que se puede invalidar la ley con efectos generales, ni es un control previo. En cuanto a la comparación de Héctor Fix-Zamudio con el sistema francés y el sistema europeo continental, aclaró que en el sistema francés no existe un tribunal constitucional. Asimismo, aclaró no conocer a ningún doctrinario que haya señalado un tope a los legisladores que pretenden impugnar una norma. Advirtió que, de aprobarse el proyecto en sus términos, se generaría un precedente peligroso en cuanto a la generación, diseño y elaboración de causas de improcedencia sin fundamento en texto constitucional alguno.

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales prorrogó la discusión del asunto para una próxima sesión, por lo que deberá permanecer en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las catorce horas con seis minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Tribunal Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria que se celebrará el jueves dos de marzo del año en curso, a la hora de costumbre.



Sesión Pública Núm. 17

Lunes 27 de febrero de 2017

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Luis
María Aguilar Morales y el licenciado Rafael Coello Cetina,
secretario general de acuerdos, quien da fe.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN